NATIONS UNIES
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
AUX DROITS DE L'HOMME

PROCEDURES SPECIALES DU
CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

UNITED NATIONS
OFFICE OF THE UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

SPECIAL PROCEDURES OF THE
HUMAN RIGHTS COUNCIL

Mandatos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; del Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación; y del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

REFERENCE: AL G/SO 214 (33-27)
HND 2/2013

18 de junio de 2013

Excelencia,

Tenemos el honor de dirigirnos a usted en nuestra calidad de Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación; y Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de conformidad con las resoluciones 16/5, 15/12, y 17/5 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido en relación con el acontecimiento ocurrido en Coowle, San Manuel, Valle de Sula, en el que guardias de seguridad de la Compañía Azucarera Hondureña (CAHSA) habrían disparado contra campesinos del Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM), causando la muerte del Sr. **Valentín Avelar Caravante** y del Sr. **Celso Victorino Ruiz Martínez**; y produciendo lesiones graves a varios campesinos, entre ellos, los Sres. **Adolfo Melgar** y **Santos Aníbal Melgar Vargas**. Asimismo, el 20 de mayo de 2013, la Sra. **Marilú Miranda Orellana**, miembro del MOCSAM, habría sido también asesinada.

Se informa que el Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM) defiende los derechos de los campesinos que, en marzo de 2012, habrían sido ilegalmente expropiados de sus tierras en el Valle de Sula por el Instituto Nacional Agrario (INA) y en beneficio de la compañía agrícola Hondureña S.A (CAHSA). Durante el desalojo, los campesinos habrían recibido amenazas de muerte por parte del Sr. Clother, uno de los guardias de seguridad privada.

Según las informaciones recibidas:

El 17 de mayo de 2013, alrededor de las 15:00 horas, 30 guardias de seguridad de la compañía CAHSA, sin previa advertencia ni negociación, habrían disparado

ráfagas con diferentes tipos de armas, incluyendo escopetas y pistolas de distintos calibres, contra alrededor de 700 familias campesinas, afiliadas al Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM), que intentaban entrar en las tierras en las cercanías de la aldea Coowle, San Manuel, Valle de Sula. Se informa que la Corte de Apelaciones de lo penal de San Pedro Sula habría admitido, el 6 de marzo de 2013, un recurso de amparo interpuesto por los campesinos, suspendiendo así la expropiación.

Según estas alegaciones, los disparos habrían causado lesiones a varios campesinos, entre ellos, los Sres. Adolfo Melgar y Santos Aníbal Melgar Vargas. Además, los disparos habrían producido la muerte del Sr. Valentín Avelar Caravante, de la aldea La 34 en el sector de Guaymas, y miembro del grupo campesino Amigos Solidarios, y del Sr. Celso Victorino Ruiz Martínez, de la comunidad de Moregen Villafranca, municipio de Tela, quien habría recibido una bala en la pierna y habría fallecido durante su traslado a un hospital.

A pesar de los disparos, los campesinos habrían continuado ocupando las tierras hasta alcanzar a los guardias, quienes se habrían visto obligados a retroceder, profiriendo insultos y amenazando con sus armas.

Además, tres patrullas de la Policía Nacional se habrían presentado en el lugar de los hechos. Los guardias privados que supuestamente dispararon se encontraban portando sus armas. Sin embargo, los agentes de la policía no procedieron a arresto alguno. Asimismo, se afirma que la agentes de la Dirección General de Investigación Criminal, encargada habitualmente de la investigación de este tipo de hechos, no se habrían presentado.

Se informa que después de estos acontecimientos, el 20 de mayo del 2013, alrededor de las 7:00 horas, la Sra. Marilú Miranda Orellana, miembro del Movimiento Campesino de San Manuel Cortés (MOCSAM), habría sido asesinada por un grupo de cuatro hombres fuertemente armados, al salir de su casa en la colonia Altos de El Progreso.

Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, deseamos llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual Honduras ratificó el 25 de agosto de 1997. Los artículos 3 y 6 de dichos instrumentos respectivamente garantizan a todo individuo los derechos a la vida y a la seguridad de su persona y disponen que estos derechos sean protegidos por la ley y que nadie sea arbitrariamente privado de su vida.

Además, debemos llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre la Observación General No. 31 del Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, párrs. 8), en la que se indica que “(s)ólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que

cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre particulares o entidades privadas (...)”.

En cuanto a la prosecución y el enjuiciamiento de los autores de ejecuciones extrajudiciales, nos gustaría apelar a los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, resolución 1989/65 de 24 de mayo de 1989 del Consejo Económico y Social, y en concreto, el principio 9 el cual indica que “se procederá a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (...)”. Además, el principio 18 afirma que “los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. (...)”

En este contexto, deseamos llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos y en particular los artículos 1 y 2. Éstos establecen, respectivamente, que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que es la responsabilidad primordial y el deber de todos los Estados de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica todos esos derechos y libertades.

Además, quisiéramos referirnos al artículo 12, párrafos 2 y 3, de la declaración estipula que el Estado garantizará la protección, por las autoridades competentes, de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Con respecto a las alegaciones recibidas indicando que la autoría de la violación de los derechos de los defensores se atribuye a un agente no estatal, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre la Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/13/13 de 15 de abril de 2010, la cual reconoce “la necesidad inmediata de poner fin a las amenazas, el acoso, la violencia, incluida la violencia de género, y las agresiones de estados y entidades no estatales contra quienes se dedican a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos,

así como de adoptar medidas concretas para prevenirlos”. En esta Resolución, el Consejo de Derechos Humanos “insta a los Estados a que promuevan un entorno seguro y propicio en el que los defensores de los derechos humanos puedan actuar libres de obstáculos e inseguridad”.

Asimismo, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en su informe a la Asamblea General A/65/223 de 4 de agosto de 2010, párrafos 28 y 29, señala que en el contexto de violaciones de los derechos humanos de los defensores cometidas por agentes no estatales, la responsabilidad de los mismos de respetar los derechos de los defensores “no libera al Estado de las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de derechos humanos de respetar, proteger y aplicar los derechos humanos, incluidos los de los defensores de los derechos humanos”. (...) La Relatora Especial sostiene que la obligación del Estado de proteger “consiste, en primer lugar, en asegurar que los defensores no sufran violaciones de sus derechos a manos de agentes no estatales. La falta de protección podría, en determinadas circunstancias, comprometer la responsabilidad del Estado. En segundo lugar, los Estados deberían proporcionar un recurso eficaz a los defensores cuyos derechos humanos sean violados. Para ello, todas las violaciones de los derechos de los defensores deberían investigarse con prontitud e imparcialidad y los infractores deberían ser sometidos a juicio. Es fundamental combatir la impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores, para que éstos puedan trabajar en un entorno seguro y propicio.”

Además, nos gustaría destacar las obligaciones del Estado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos. La Relatoría de los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró “esto implica cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad. Al respecto, la Corte Interamericana ha manifestado que: “Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” La Relatoría de los derechos de la mujer también ha señalado que “el sistema interamericano de derechos humanos ha afirmado también que la responsabilidad de los Estados de actuar con la debida diligencia frente a actos violentos se extiende a las acciones de actores no estatales, terceros y particulares. Al respecto, la Corte Interamericana ha enfatizado que, “dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. Las obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección, a cargo de los Estados Partes en la Convención Americana de Derechos Humanos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención.”

Adicionalmente, en referencia a esta alegación, en la cual los presuntos autores de los hechos son guardias de seguridad contratados por una empresa privada, nos gustaría referirnos a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 16 de Junio del 2011 en la resolución 17/4. Uno de estos principios rectores destaca la importancia y el deber del estado de proteger los derechos humanos y estipula que, “los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.”

Apelamos pues al Gobierno de su Excelencia a fin que se produzca una investigación imparcial y transparente sobre las circunstancias que rodearon la muerte y heridas graves de las víctimas arriba mencionadas a fin de tomar todas las medidas judiciales necesarias para se asegure que se enjuicie y castigue a los responsables, así como compensar a las víctimas o familias de las víctimas.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgado por el Consejo de Derechos Humanos intentar clarificar los hechos traídos a nuestra atención. En nuestro deber de informar sobre esos casos al Consejo de Derechos Humanos, estaríamos muy agradecidos si pudiera obtener su cooperación y sus observaciones sobre los siguientes asuntos:

1. ¿Son exactos los hechos a los que se refieren las alegaciones presentadas?
2. Por favor, confirme si se ha presentado queja por parte de las supuestas víctimas o en sus nombres.
3. Por favor, sírvase proporcionar información detallada, así como los resultados si están disponibles, de cualquier investigación, examen médico y judicial u otro tipo de pesquisa que se haya llevado a cabo para esclarecer los hechos violentos.
4. Por favor, sírvanse proporcionar información detallada sobre las diligencias judiciales que se hayan iniciado, y en particular, sobre el recurso de amparo admitido a tramite por la Corte de Apelaciones de lo penal de San Pedro Sula que habría interpuesto los campesinos, suspendiendo la expropiación. ¿Se ha impuesto alguna sanción penal, disciplinaria o administrativa?
5. Por favor, indiquen si se ha proporcionado compensación a las víctimas o a sus familias.
6. Por favor, sírvanse indicar las medidas adoptadas para garantizar que los campesinos integrantes del Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM) puedan llevar a cabo sus actividades pacíficas sin temor a actos de intimidación, agresiones o ataques de ningún tipo.

Agradeceríamos recibir una respuesta del Gobierno de su Excelencia a estas preguntas antes de 60 días. Garantizamos que la respuesta del Gobierno de su Excelencia a cada una de estas preguntas será incluida en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos para que le examine.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de los campesinos del Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Christof Heyns

Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Margaret Sekaggya

Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos

Anton Katz

Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación